

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, nueve (09) de octubre de dos mil veinte (2020).

AUTO INTERLOCUTORIO

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-33-33-020-2018-00318-01
DEMANDANTE:	JOSÉ SANTOS OREJUELA MACIAS Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS
ASUNTO:	APELACIÓN DE AUTO EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD – REVOCA.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se resuelve el recurso de apelación, propuesto por la parte demandante contra el auto interlocutorio nro. 892 del 8 de octubre de 2019¹, proferido por el Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito de Cali, que declaró probada de oficio la excepción de caducidad.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, el señor José Santos Orjuela Macias y otros demandaron a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declare administrativamente responsables por la privación injusta de la libertad y/o error judicial de la que fue objeto el señor Jonathan Orjuela Marín; y como consecuencia se les condene al pago de los perjuicios patrimoniales, morales, psicológicos, biológicos por daño emergente y por lucro cesante.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio No. 892 del 8 de octubre de 2019, el a *quo* declaró probada de oficio la excepción de caducidad al considerar que, en el presente caso, la decisión de preclusión fue adoptada por la imposibilidad de continuar con la investigación a raíz de la muerte del señor Jonathan Orjuela Marín, en consecuencia, no es a partir de esa fecha que se consolidó el daño antijurídico reclamado.

Pues consideró, que el daño padecido por los demandantes, en criterio del despacho y de acuerdo a lo narrado en el escrito de la demanda, consiste no sólo en la privación supuestamente injusta de la libertad del señor Jonathan Orjuela Marín, sino por la prolongación de la investigación penal adelantada en su contra, que se extendió por más de dos (2) años, aún después de ser revocada la medida de aseguramiento que le había sido impuesta.

En ese contexto, consideró el despacho, que en aplicación del principio *iura novit curia*, que los anteriores supuestos se ajustan más al título de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, y el daño alegado por los actores se

¹ Ver folios 251 a 253



consolidado en el momento en que se hizo imposible determinar la situación jurídica del actor, a causa de su fallecimiento.

De manera que, el daño presuntamente antijurídico, no se consolidó en el momento en que se precluyó la investigación y se supo que la privación de la libertad y la tardanza en la decisión de la investigación había sido prolongada de manera injustificada por causas atribuibles a las entidades demandadas, sino en el momento en que se hizo imposible continuar con la investigación penal que se llevaba a cabo en contra del señor Jonathan Orjuela Marin, por causa de su deceso.

Teniendo en cuenta que el fallecimiento del actor ocurrió el día 29 de junio de 2016, los dos (2) años establecidos en el CPACA, vencía el 30 de junio de 2018.

La solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el día 8 de noviembre de 2018 ante la Procuraduría 59 Judicial I para Asuntos Administrativos de esta ciudad, de manera que el término de caducidad del medio de control ya estaba vencido.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Sostiene la parte recurrente que no comparte la decisión del a quo, por cuanto el auto que decide la preclusión de la investigación es el que determina el término de caducidad de la presente acción, invocando que los demandantes se vieron avocados a una situación fáctica en la cual el señor Jonathan Orjuela Marín se encontraba inmerso en un proceso judicial, así entonces la jurisprudencia nos ha decantado de que acceder a la acción judicial ya sea por privación injusta de la libertad o por error judicial solamente es competente a partir de la fecha en que se declara la terminación del proceso ya sea por sentencia absolutoria o por preclusión de la misma. Como quiera que la audiencia de preclusión se llevó a cabo en diciembre de 2016, la solicitud de conciliación y la posterior acción judicial se presentó dentro del término legal de los 2 años posteriores a la declaratoria de preclusión de la acción judicial en materia penal. (*Min: 10:14:45 hasta 10:17:35*)

V. CONSIDERACIONES:

5.1. RECURSO DE APELACIÓN

El artículo 244 de la Ley 1437² regula el trámite del recurso de apelación. Así entonces, verificado que el recurso fue presentado dentro de la oportunidad legal y se corrió traslado del mismo a los demás sujetos procesales, se procede a estudiar el asunto.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

- ¿En el presente asunto operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa por privación inata de la libertad y/o error judicial como lo determinó el a quo?.

² ARTÍCULO 244. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN

CONTRA AUTOS. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

1. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente en el transcurso de la misma.

De inmediato el juez dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales con el fin de que se pronuncien y a continuación procederá a resolver si lo concede o lo niega, de todo lo cual quedará constancia en el acta.

(...):



5.3. TESIS

La Sala revocará el auto apelado, que declaró la caducidad del medio de control, toda vez que a consideración de esta Corporación el término de caducidad, en los contornos de las pretensiones dirigidas a reclamar por la privación injusta de la libertad y/o error judicial o por defectuoso funcionamiento de la administración, al interior de un proceso judicial, debe contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria del auto interlocutorio nro. 229 que declaró precluida la investigación del 1 de diciembre de 2016.

Para soportar la decisión es pertinente realizar un recuento normativo y jurisprudencial acerca de la caducidad en la Jurisdicción Contencioso Administrativa y aplicarla al caso concreto.

• DE LA CADUCIDAD

El artículo 140 del CPACA consagra el medio de control de Reparación Directa y el numeral 2 del artículo 164 exige que debe ejercerse dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso.

- La **caducidad** es una institución jurídica que estableció el Legislador como una forma de lograr la seguridad jurídica que propende por el interés general de obligatoria observación y aplicación por el juzgador al momento de admitir la demanda.

El Consejo de Estado³ ha manifestado:

“...De la caducidad del medio de control de Reparación Directa.

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Es así como este fenómeno procesal opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial. La caducidad ha sido entendida como la extinción de la posibilidad de formular una pretensión por el transcurso del tiempo previamente fijado por la ley en forma objetiva. En referencia a esta institución el Consejo de Estado ha argüido⁴:

En la caducidad deben concurrir dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción. Dicho término está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no. Es por lo anterior que no puede ser materia de convención antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse. La facultad potestativa de accionar comienza con el plazo prefijado por la ley y nada obsta para que se ejerza desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, improrrogable (...).

³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera- Subsección A. Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN del 21 de junio de 2019. Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01197-01 (61157). Actor: HERNÁN RINCON CASTRO Y OTROS. Demandado: ECOPETROL. Referencia: MEDIO DE CONTROL DE Reparación Directa.

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de febrero de 2008, exp. 16207, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.



La regla general indica que el término de caducidad **se comienza a contabilizar a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa** o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. **No obstante, en otros casos, no es tan evidente la fecha cierta a partir de la cual se debe empezar a contabilizar el plazo de dos años previsto en la ley. En estos eventos ocurre que el daño se produce o se manifiesta con posterioridad al hecho dañino que lo causa**, es decir, la causa lesiva no es contemporánea con el daño, razón por la cual se impone a fortiori acoger una interpretación flexible —fundada en el principio pro damato de la norma— que establece el término de caducidad con el fin de proteger el derecho de acceso a la administración de justicia y de asegurar la prevalencia del derecho sustancial. Si se considera que el daño es el presupuesto primordial para la procedencia de la acción de reparación directa, es obvio considerar que el plazo de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del “acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa”, sino excepcionalmente a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad, esto es, cuando i) la víctima se percata de su ocurrencia, o ii) desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o ejecución continuada.

(...)

Los efectos en el tiempo del hecho dañoso no cambian la regla general a partir de la cual empieza a contabilizarse el término para acudir a la justicia, ya que, según esta Corporación, “no puede confundirse la causación del daño con la prolongación del mismo, pues muy diferente es que el daño se genere por una permanente acción u omisión de la entidad y otra cosa es que el daño permanezca en el tiempo o se agrave por la falta de remedio oportuno⁵”. Así las cosas, el hecho de que el daño se agrave con el tiempo no quiere decir que este tenga el carácter de continuado o de tracto sucesivo⁶, ya que, siguiendo lo dicho por esta la Corporación, ello implicaría atentar contra la seguridad jurídica al prolongar indefinidamente el término para presentar la demanda:

(...)

De acuerdo con lo anterior, para efectos de contabilizar la caducidad, lo relevante es la causa del daño -¿qué produjo el daño?- y no las consecuencias del mismo. Así, cuando el daño es de ejecución instantánea, esto es, se consume en un solo evento, incluso si se prolongan sus consecuencias, el término de caducidad coincide con el acaecimiento de la causa del daño y se aplica la regla general que prescribe que el término de caducidad se contabiliza al día siguiente del hecho dañino, en tanto que si el hecho dañoso es continuado, esto es, el daño se genera en el tiempo por una incesante y reiterada acción de la entidad demandada, el término de caducidad correrá, igualmente, de manera sucesiva, es decir, frente a cada actuación...” (Negrilla fuera de texto).

- Respecto a la **caducidad** en el medio de control de reparación directa, el Consejo de Estado indica específicamente en eventos de la **privación de la libertad**:

“...El ejercicio oportuno de la acción

En los asuntos de reparación directa bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que **precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad**, consideración que resulta compatible con la norma puesta de

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 26 de marzo de 2007, rad. AG-250002325000200502206-01, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de febrero de 2006, rad. AG-76001-23-31-000-2002-04789-01, M. P. Germán Rodríguez Villamizar.

presente, dado que es a partir de ese evento que se tiene conocimiento efectivo del daño, como consecuencia de la decisión absolutoria⁷.

*En el sub lite, la Subsección advierte que la providencia proferida por el Tribunal Superior de Cali, por medio de la cual declaró la prescripción de las acciones penal y civil, como consecuencia decretó la “CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO seguido en contra de los mencionados procesados” fue expedida el **23 de enero de 2013** y quedó ejecutoriada el 25 de febrero de la misma anualidad⁸.*

Así las cosas, el término de caducidad, en principio, correspondían entre el 26 de febrero de 2013 y el 26 de febrero de 2015; sin embargo, se suspendió con la solicitud de conciliación extrajudicial radicada por la parte actora el 23 de enero de 2015, trámite que se declaró fallido el 26 de febrero siguiente.

Como la demanda se presentó el mismo día en el que se dio por agotado el trámite conciliatorio, se concluye que el derecho de acción se ejerció en oportunidad⁹...”¹⁰ (Negrilla y Subraya fuera de texto).

- **Caducidad** de la acción de reparación directa **por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia** - cómputo. término.

“...El cómputo de la caducidad, tratándose de eventos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debe contarse a partir del momento en que la parte actora tuvo o debió tener conocimiento de la acción u omisión causante del daño¹, “que para estos casos generalmente se hace evidente o se concreta mediante la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad judicial...”¹¹

5.4. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 328¹² del C.G.P aplicable por remisión expresa del artículo 306¹³ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

El apelante indicó que en el presente caso, el medio de control no se encuentra caduco al considerar que el auto que resolvió la preclusión de la investigación es el que determina el término de caducidad, por lo tanto, como el señor Jonathan Orjuela Marín se encontraba inmerso en un proceso judicial, la jurisprudencia ha decantado de que para acceder a la acción judicial ya sea por privación injusta de la libertad o por error judicial solamente es competente a partir de la fecha en que se declara la terminación del proceso ya sea por sentencia absolutoria o por preclusión de la misma. En consecuencia, como quiera que la audiencia de preclusión se llevó a cabo en diciembre de 2016 y la acción judicial se presentó dentro del término legal de los 2 años posteriores a la declaratoria de preclusión de la acción judicial en materia penal.

⁷ Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2002, exp. 13622. CP. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, exp. 21801 y auto del 9 de junio de 2010, exp. 37410. CP. Mauricio Fajardo Gómez.

⁸ Folio 522, cuaderno 1 A.

⁹ Folios 576 a 578, cuaderno 1A.

¹⁰ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera- Subsección A. Consejera Ponente: MARTHA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 76001-23-33-000-2015-00207-01(63084). Actor: CLAUDIA MARÍA CORREA QUINTERO Y OTROS. Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL.

¹¹ Consejo de Estado, sentencia de 21 de junio de 2018, Radicación número: 44001-23-31-000-2010-00032-01(45465).

¹² ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

¹³ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.



De los documentos allegados al plenario principalmente el proceso penal adelantado bajo la radicación nro. 760016000193201400216-00, se tiene que el señor Jonathan Orjuela Marín fue privado de la libertad mediante orden de encarcelación del 4 de enero de 2014¹⁴ por los delitos de Homicidio Agravado en Grado de Tentativa en concurso heterogéneo con los delitos de Hurto Calificado y Agravado en Grado de Tentativa y Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, accesorios, partes o municiones con circunstancias de agravación punitiva. Posteriormente, tal medida fue revocada mediante audiencia del 18 de marzo de 2014 y se hizo efectiva a través de boleta de libertad nro. 087 del 19 de marzo de 2014¹⁵.

Posteriormente, el día **26 de junio de 2016** el señor Jonathan Orejuela Marín fallece¹⁶, y en razón a tal situación el Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento mediante audiencia del **1 de diciembre de 2016** decreta la preclusión de la investigación penal que se seguía en su contra ***“por la imposibilidad de continuar con la acción penal por muerte”***.

Establecido lo anterior, debe indicarse que en aplicación al principio de la seguridad jurídica y las garantías del acceso a la administración de justicia el Consejo de Estado ha señalado que *“...si bien la caducidad guarda una estrecha relación con el principio de seguridad jurídica, el cómputo del plazo de que trata la ley debe analizarse en cada caso en particular a partir de los hechos que son presentados con el fin también de garantizar el acceso a la administración de justicia, razón por la cual, no necesariamente el cómputo de dos años debe efectuarse con la realización pura y simple del hecho causante del daño, sino que resulta necesario, dependiendo del caso, que ese hecho hubiera sido conocido por el afectado...”*¹⁷

Así entonces, como ya se indicó el Consejo de Estado ha sido claro en establecer que en los asuntos de reparación directa bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad, el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que **precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad,** dado que es a partir de ese evento que se tiene conocimiento efectivo del daño¹⁸.

De otra parte, en tratándose de los hechos de la administración de justicia por defectuoso funcionamiento de la administración, dicha Corporación ha considerado por regla general, que el plazo para incoar la acción de reparación directa **debe iniciarse a partir del momento en que adquirió firmeza la providencia judicial** que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad judicial.

De conformidad con lo expuesto, independientemente del título usado para presuntamente atribuir responsabilidad al Estado en el presente caso, considera esta Corporación que el término de caducidad del presente medio de control debe contabilizarse a partir del día siguiente a la firmeza del auto interlocutorio nro. 229 del 1 de diciembre de 2016 que declaró precluida la investigación, independiente de los fundamentos que fueron tenidos en cuenta para declarar dicha preclusión, lo cual hace parte del estudio de fondo del asunto.

¹⁴ Ver folio 160

¹⁵ Ver folio 138

¹⁶ Ver folio 24

¹⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Subsección B. Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO. Providencia del cinco (05) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 20001-23-31-000-2011-00524-01(46278) Actor: FABIÁN ROBERTO PAVAJEAU CELEDÓN Y OTROS Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

¹⁸ Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2002, exp. 13622. CP. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, exp. 21801 y auto del 9 de junio de 2010, exp. 37410. CP. Mauricio Fajardo Gómez.



En consecuencia, se tiene entonces que auto interlocutorio nro. 229 del 1 de diciembre de 2016 proferido por el Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento fue notificado en estrados judiciales sin que se interpusiera recurso alguno¹⁹, lo que indica que cobró ejecutoria el día **1 de diciembre de 2016**.

Por lo tanto, el término de caducidad del presente medio de control se contabiliza desde el **2 de diciembre de 2016 al 2 de diciembre de 2018**; para la fecha de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial que fue el 8 de noviembre de 2018²⁰, faltaban 25 días para el fenecimiento del término de caducidad de la demanda; que se reanudó al día siguiente a la fecha en la cual la Procuraduría 59 Judicial I Para asuntos administrativos notificó y entregó la correspondiente constancia (11 de enero de 2019), y la demanda se presentó 19 de diciembre de 2018 en término.

Por lo expuesto, se revocará la providencia recurrida que declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, por las razones expuestas en la parte motiva.

En consecuencia, se;

R E S U E L V E:


PRIMERO.- REVOCAR el auto interlocutorio 892 del ocho (08) de octubre de dos mil diecinueve (2019), proferido por el Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito de Cali, que declaró probada de oficio la excepción de caducidad.

SEGUNDO.- Ejecutoriada la presente providencia envíese el expediente al Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito de Cali, para lo de su competencia.

Proyecto discutido y aprobado en acta de Sala de Decisión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los magistrados,


JHON ERICK CHAVES BRAVO
Ponente

¹⁹ Ley 906 de 2004. " Artículo 169. ".
²⁰ Ver folio 187

RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 2018-00318-01
: REPARACIÓN DIRECTA
: JOSÉ SANTOS OREJUELA MACIAS Y OTROS
: RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN



RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
Magistrado

Elab. Yurani López
Vo.Bo. Secretario

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado